



Juliana **GARCIA PERES MURAD***

*: Psicóloga, posee maestría en psicología en la Universidad de São Paulo (USP). Consultora en políticas sociales y asesora técnica del Programa de Justicia Presente del Consejo Nacional de Justicia.
e-mail: jumurad3@gmail.com.

Camila **POTYARA PEREIRA***

*: Socióloga, posee maestría y doctorado en Política Social en la Universidad de Brasilia (UnB). Profesora del Departamento de Trabajo Social y del Programa de Posgrado en Política Social de la UnB.
e-mail: camilapotyara@gmail.com

PRESENTADO: 10.09.20

ACEPTADO: 30.10.20

61

INSEGURIDAD ALIMENTARIA, HAMBRE Y POBREZA: COVID-19 EN BRASIL

Resumen

En este texto, buscamos debatir, con base en investigaciones recientes e informes sobre la situación actual, algunas de las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en Brasil para la seguridad alimentaria de la población nacional. Observamos que los desafíos inherentes a nuestra condición política y económica han sido reforzados y expuestos por la crisis de salud. Al mismo tiempo, la forma en que el Gobierno ha tratado el tema ha sido especialmente brutal para la clase trabajadora. La apatía expresada en la no acción junto con la acción irresponsable e irreflexiva señala la necropolítica brasileña actual que naturaliza el sufrimiento y ha condenado a la muerte miles de personas.

Palabras Clave: Alimentación; COVID-19; Hambre; Pobreza; Brasil.

Summary

In this text, we seek to debate, based on recent research and reports on the current situation, some of the consequences of the COVID-19 pandemic in Brazil for the food security of the national population. We noticed that the challenges inherent to our political and economic condition have been reinforced and exposed by the health crisis. At the same time, the way the Government has dealt with the issue has been especially brutal for the working class. Apathy expressed in non-action coupled with irresponsible and thoughtless actions marks the current Brazilian necropolitics that naturalizes suffering and has condemned to death thousands of people.

Key words: Food; COVID-19; Hunger; Poverty; Brazil.

INTRODUCCIÓN

La alimentación de calidad, esencial para el mantenimiento y la reproducción de la vida, es una necesidad humana básica, la más elemental y universal de todas. Sin embargo, a pesar de su indispensabilidad, ha sido históricamente descuidada por los gobiernos de todo el mundo y su satisfacción ha sido dada a la responsabilidad individual y no estatal. Siendo así, si no se atiende, incluso hoy, sus consecuencias solo ganan visibilidad cuando se relacionan directamente con el hambre; sus otras implicaciones son generalmente ignoradas. En consecuencia, la enfermedad resultante del bajo consumo de comida de verdad¹ junto con el alto consumo de productos industrializados comestibles no suele ser una preocupación del gobierno. Aún menos atención recibe la ingesta generalizada e involuntaria de alimentos ricos en venenos², una de las causas contemporáneas de la creciente incidencia de diversas enfermedades y muertes, especialmente en los países capitalistas periféricos, que tienen una legislación y aplicación más indulgentes que la de países capitalistas centrales. Brasil, por ejemplo, ha sido considerado, desde 2008, como el mayor consumidor de pesticidas del planeta. Desde el comienzo del gobierno de Jair Messias Bolsonaro, en enero de 2019, el país rompió el

récord de venenos liberados, alcanzando, hasta julio de 2020, el total de 701 nuevos pesticidas registrados (Andrade; Bittencourt, 2020).

La alimentación, por lo tanto, es una necesidad que tiene lugar por medio de la acción del consumo. Todavía, el consumo de alimentos como valor de uso, a lo largo de los siglos, ha sido reemplazado gradualmente por el consumo mercantilizado. Comer, bajo el capitalismo, es comprar una mercancía, no siempre de calidad, no siempre saludable, no siempre comida, aunque siempre comestible. Paradójicamente, cuanto mayor es el poder de compra del consumidor, mayor es el acceso a frutas, verduras, carne y huevos. La investigación sobre el precio de las calorías en las variedades de alimentos, realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en ocho países de América Latina y el Caribe, reveló que los azúcares, los refrescos, los jugos en polvo, las gelatinas y los chocolates son más baratos que los vegetales (FAO, 2017).

Por lo tanto, cuando el mercado satisface la necesidad básica de alimentos, ella se expresa, para las clases dirigentes, en una alimentación sofisticada, cultural, diversa, saludable, fresca y regular.

1. Compreendida como compuesta de alimentos frescos o mínimamente procesados.

2. En este artículo, hemos elegido usar el término veneno o pesticidas, en un intento de nombrar estas sustancias por lo que son en esencia, evitando el subterfugio retórico que puede confundir o manipular a la opinión pública sobre su daño. Por lo tanto, refutamos el uso de terminologías tales como productos fitosanitarios.

Por otro lado, para la clase trabajadora, consiste en comer para sobrevivir.

La comprensión de que mejorar las condiciones de alimentación de las personas aumenta la productividad de la clase trabajadora, daña menos el medio ambiente, contribuye a la economía del gasto social en políticas de salud, fortalece los lazos culturales comunitarios tradicionales, entre muchos otros beneficios, poco a poco, fue ganando espacio a lo largo del siglo XX. Todavía, las presiones populares que resultaron en conquistas políticas en el área de los alimentos no constituyeron una tendencia de expansión constante. Discontinuidades, retrocesos y retrasos señalan las acciones públicas desarrolladas en este campo.

Para tener una idea, los alimentos solo adquirieron estatus legal con la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en 1948. Sin embargo, en Brasil, solo se la consideró un derecho social cincuenta y cinco años después, con la Enmienda Constitucional (PEC) 047, de 2003. Este reconocimiento elevó los alimentos al nivel de los derechos de los ciudadanos y deber del Estado. Antes de eso, el tema, aunque presente desde fines de la década de 1930, especialmente después de importantes estudios del geógrafo brasileño Josué de Castro sobre el hambre, no ocupó un lugar destacado en la agenda del gobierno.

Josué de Castro trató el hambre como un problema social - y no natural - directamente relacionado con la falta de ingresos, lo que, para él, constituía una de las mayores amenazas a la provisión de alimentos de las familias trabajadoras (Silva, 2014). En Brasil, el hambre nunca ocurrió por la escasez, sino debido a la condición de pobreza y falta de aprovisionamiento que impiden el acceso a alimentos para grupos considerables de la población. De esta manera, hay una yuxtaposición de los determinantes de la pobreza y del hambre en este país. Por lo tanto, su pelea necesariamente tendría que estar asociada con la institución de políticas sociales específicas. Los estudios de Josué de Castro tuvieron grandes repercusiones nacionales e internacionales e influyeron, entre otras acciones, en el establecimiento, por parte del presidente Getúlio Vargas, del salario mínimo, que empezó en Brasil en enero de 1940.

Castro fue también responsable de presentar el debate sobre el “hambre oculto”, que mata a muchos brasileños, incluso hoy, a pesar de que, como señala el autor, comen todos los días. Bajo la noción de hambre oculta, el componente nutricional de los alimentos empezó a ser considerado como un indicativo de la calidad de la alimentación y a refutar la idea de que la solución al hambre debería ser la mera ingestión de un *quantum* de calorías. Los avances teórico-conceptuales en relación con el tema de los alimentos no fueron necesariamente, como ya se indicó en este texto, acompañados de iniciativas gubernamentales recíprocas. El progreso observado ocurrió debido a la fuerte movilización y lucha de los movimientos sociales organizados.

Por lo tanto, a pesar de la apatía del Estado, se alcanzaron logros importantes en esta área, especialmente en la primera década del siglo XXI. Con la elección de Luíz Inácio Lula da Silva a la presidencia de la República en 2003, el tema de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) fue ganando importancia en la agenda pública y se convirtió, aún en ese año, en una prioridad del gobierno (Silva, 2014).

De ahí, transcurrió el intento de equiparar los ingresos insuficientes de las familias trabajadoras a través de programas de transferencia directa de renta, como el Programa Bolsa Família (PBF); el establecimiento de un Registro Único para Programas Sociales del Gobierno Federal (CadÚnico); el fortalecimiento e institucionalización de una Política Nacional de Asistencia Social, con un enfoque en el fortalecimiento de la función protectora de las familias; las acciones desarrolladas para impulsar la agricultura familiar por medio de compras públicas, la reducción de la burocracia en la comercialización mediante la exención de impuestos y la dispensa de los procesos de licitación para la compra de productos agrícolas familiares para el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA); y el Programa Nacional de Comidas Escolares (PNAE), también incorporado en el PAA, en 2008. El acceso a restaurantes populares y cocinas comunitarias fueron también estrategias para garantizar, en grandes centros urbanos, comidas saludables y accesibles para la población pobre. Y el fortalecimiento de instancias participativas de la sociedad civil, como los Consejos y Conferencias Naciona-

les, los cuales fueron instrumentos democráticos proposicionales y consultivos de control democrático fundamental, que han reunido a varios representantes de movimientos y sectores sociales que han permitido

(...) inclusión del derecho a la alimentación en la Constitución Federal; la defensa de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes [quilombolas]; el fortalecimiento de cultivos alimentarios en línea con los biomas y ecosistemas brasileños; el fortalecimiento de la agricultura familiar y agroecológica; reducción del uso de pesticidas; progreso en la agenda reguladora, por ejemplo, en el área de etiquetado de alimentos (transgénicos, ultraprocesados) y la tributación de alimentos e insumos; el avance del código de salud para hacerlo más inclusivo y adecuado para la producción a pequeña escala y la comercialización en circuitos cortos, entre muchos otros (Castro, 2019: 2, texto traducido).

Otro aspecto importante fue el de proporcionar investigación calificada a las políticas públicas de seguridad alimentaria en Brasil, como el Informe sobre “Seguridad alimentaria y nutricional y el derecho humano a una alimentación adecuada: indicadores y monitoreo” (2010), una iniciativa del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA). En 2014, Brasil salió del Mapa del Hambre.

Sin embargo, a pesar de estos avances, desde el final de los gobiernos del PT, de Lula (2003–2011) y Dilma Rousseff (2011–2016), - este último interrumpido abruptamente por el golpe político-judicial-mediático que llevó a Michel Temer a la Presidencia de la República - se puede observar: el desmantelamiento de instituciones, organizaciones y consejos de defensa de la alimentación y el campesinado; flexibilización de las leyes sobre pesticidas y reducción en el gasto social; decrecimiento del poder de compra de la población pobre y extremadamente pobre y el desguace de las políticas nacionales de salud y educación. En su primer día de gobierno, Jair Bolsonaro firmó la

Medida Provisional No. 870, que extinguió a CONSEA, comprometiendo toda la ardua y oscilante trayectoria de conquista, así como la garantía del derecho humano a la alimentación en un contexto nacional cada vez más propenso a regresar al Mapa del Hambre (Castro, 2019).

Desde marzo de 2020, Brasil enfrenta a la pandemia de Covid-19. Según datos del *Imperial College* de Londres, un importante centro de investigación de epidemias en todo el mundo, el país completó catorce semanas sin control del virus (Pinto, 2020). Desde la última semana de abril, la velocidad de transmisión en Brasil ha estado aumentando; y, mientras se prepara este ensayo, a fines de julio, Brasil ya ha registrado más de 2,5 millones de casos confirmados y alrededor de 92 mil muertes, según datos oficiales del Ministerio de Salud. En este contexto, los desafíos para garantizar el acceso a la comida de calidad, segura, limpia y justa para toda la población son colosales. Adelante, se busca enumerar y discutir críticamente, algunos de los desafíos más notables.

LOS DESAFÍOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 Y LA ALIMENTACIÓN EN BRASIL

Cuando se abordan juntas la alimentación y la pandemia en informes publicados por los medios de comunicación, es rutinario que la discusión del tema oscile entre dos tipos de enfoques: 1) lo que recomienda el cuidado de los alimentos que la población debe adoptar ante la amenaza a la salud individual; y 2) lo que presenta y denuncia la situación de inseguridad alimentaria y nutricional de los estratos de población que no pueden comer adecuadamente debido a la profundización de la pobreza.

El desmantelamiento de las políticas de seguridad alimentaria, expuesto brevemente en la introducción de este artículo, causó graves daños a las condiciones de vida de la clase trabajadora, incluso antes de la actual emergencia sanitaria. A pesar de que Brasil ha avanzado hasta el punto de salir del Mapa del Hambre en 2014, la situación experimentada hoy es crítica, principalmente considerando la profundización de la crisis económica, política y social, debido a la incapacidad del gobierno brasileño para enfrentar a la pandemia.

La quiebra de la red de seguridad alimentaria y nutricional, la desmovilización de los movimientos sociales y la desarticulación de las formas democráticas participativas fueron prioridades del gobierno de Bolsonaro desde el primer día de su mandato.

Los desafíos planteados por la emergencia de salud pública exponen el resultado de la política depredadora implementada en el país desde 2019. Además, la “nueva normalidad” impone al campesino un cambio en la rutina de la siembra y la cosecha, para no generar la aglomeración de los trabajadores rurales; la disminución del acceso a los recursos estatales para la producción, distribución, flujos y comercialización de la producción; la reducción de ventas debido al cierre de ferias, restaurantes y otros espacios comerciales o la disminución en el número de clientes; la dificultad para transportar productos rurales al ambiente urbano, agravada por las medidas para restringir la circulación de personas, *lockdown* y la limitación de la adquisición de equipos, maquinaria e insumos, debido al aumento significativo del dólar.

Para la clase trabajadora consumidora, los obstáculos para tener el acceso a alimentos de calidad nunca han sido tan difíciles. En primer lugar, como se demostró, debido a la profundización de la pobreza, el aumento del desempleo, la disminución de los ingresos familiares, todo acompañado por el concomitante *laissez-faire* estatal, que ha dejado a gran parte de la población a sus propios recursos. Un estudio realizado en abril de 2020 por el Data Favela Institute, en asociación con Locomotiva Pesquisa & Strategy, en 269 *favelas* en todos los estados brasileños, se encontró que en el 47% de los hogares ni siquiera había agua para mantener los hábitos de higiene y casi el 15% de las familias no tenían jabón en casa. Casi todos los residentes de las *favelas* no tenían suficiente comida para un mes y la mitad de ellos no tenían suficiente comida para una semana. La gran mayoría, el 82% de los padres y las madres, tenían mucho miedo de no tener dinero para alimentar a sus hijos (en una escala de 0 a 10, con 0-1 sin miedo y 9-10 con mucho miedo), el 75% de los residentes estaban muy preocupados por su propia salud y 90% muy preocupados por la salud de sus familiares mayores. Es importante recordar que el 67% de los residentes de las *favelas* son de piel

negra (Data Favela; Locomotiva, 2020). Tres meses después del estudio, con el empeoramiento de la pandemia en el país, se estima que la difícil realidad de las *favelas* de Brasil, ilustrada por el estudio, es aún más hostil.

Andrade y Bittencout (2020: s/p, texto traducido) resumen la situación actual: “se está extendiendo un escenario de hambre. Las familias que producen alimentos, por falta de alternativas, no venden sus productos y las que necesitan alimentos, sin ingresos, no pueden satisfacer el derecho básico a una alimentación adecuada”.

Hoy, con la emergencia sanitaria mundial, es necesario no solo fomentar las discusiones sobre la seguridad alimentaria y la dimensión sanitaria, sino también su relación con el desempleo, la miseria, el racismo estructural, el estrangulamiento o la interrupción del suministro de alimentos, la desigualdad social y el medio ambiente. El concepto de seguridad alimentaria y nutricional implica el uso sostenible de la tierra; la semilla nativa; la biodiversidad; la distribución equitativa de los alimentos; el precio justo y la justicia en las condiciones de trabajo de campesinos, extractivistas, transportadores; respeto por las tradiciones culturales alimentarias; el conocimiento y los temas involucrados en toda la cadena diversificada de producción y distribución de alimentos. La comida debe expresar cultura, herencia, recuerdos y promover la salud, considerando que es una expresión de la vida individual y colectiva.

Imperatori (2020) analiza el contexto de la pandemia del COVID-19, proponiendo cinco dimensiones sobre sus implicaciones para la protección social de las clases trabajadoras y de bajos ingresos. Entre los aspectos planteados por la autora están:

- 1) dificultades en la “infraestructura” vinculada a las condiciones de vida que complican o incluso impiden la prevención (vivienda compartida con muchas personas, ausencia de agua para medidas de higiene, necesidad de trabajar, imposibilitando las condiciones necesarias al aislamiento social, entre otros);
- 2) los desafíos que enfrentan las personas mayores en el país, el cuarto en el mundo en el

proceso de envejecimiento de la población, muchas en situaciones de pobreza y pobreza extrema y, sin duda, uno de los principales componentes del grupo en riesgo de Covid-19;

- 3) obstáculos al precario Sistema Unificado de Salud de Brasil (SUS), que no tiene suficientes camas, equipos y personal calificado para satisfacer las demandas de esta emergencia de salud y que puede colapsar;
- 4) la imposición a la clase trabajadora - con el peor impacto para las mujeres - del trabajo presencial, rompiendo con las recomendaciones del aislamiento social y acelerando, especialmente entre los más pobres, el grado de contagio de la enfermedad. Además, aquellos que han estado fuera del trabajo o han perdido salarios debido al aislamiento, han tenido dificultad para garantizar sus condiciones de subsistencia;
- 5) las limitaciones del beneficio eventual creado como una de las acciones de protección para los trabajadores adultos informales, autónomos o desempleados que tienen un ingreso mensual individual de hasta la mitad de un salario mínimo (R\$522,50) o un ingreso familiar mensual total de hasta tres salarios mínimos (R\$3.135,00). Nombrado de Ayuda de Emergencia, el beneficio de R\$600,00 pago por hasta tres meses para hasta dos personas en la misma familia (o R\$1200,00 para mujeres jefas de hogar), ha presentado problemas para llegar a su público-objetivo, y, como cualquier beneficio enfocado, excluyó a las personas que no cumplen con los criterios de elegibilidad pero que también se encuentran en una situación social grave.

La situación de los trabajadores informales, las personas sin hogar, las personas mayores en centros de atención a largo plazo, las personas con discapacidad, las personas que viven en condiciones de vivienda precarias, las mujeres jefas de familia con hijos, niños y adolescentes, las familias que experimentan situaciones de violencia doméstica han tenido sus condiciones agravadas. La epidemia hizo pública la situación de la desprotección de una parte significativa de la población brasileña.

En vista de este contexto alarmante y la profundización de las desigualdades, el gobierno actual ha fortalecido su discurso extremo, colocando los derechos y garantías de ciudadanía como rivales del desarrollo económico del país y incentivando la flexibilización del trabajo y la reapertura económica, alegaciones que contradicen las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los científicos y grupos de investigación nacionales.

En consideración a esto, es esencial resaltar la importancia de articular la política de salud con las otras políticas que conforman el trípode de la Política de Seguridad Social en Brasil (Salud, Asistencia Social y Seguridad Social) y fortalecer el núcleo social del Estado para proteger la sociedad, especialmente los más pobres, de los efectos de la desigualdad, de la inseguridad alimentaria y nutricional, en el contexto de la pandemia de COVID-19.

EL BENEFICIO EVENTUAL DE COVID-19 Y LA GARANTÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

La implementación de la Ayuda de Emergencia para los brasileños pobres y extremadamente pobres a fin de enfrentar la crisis desencadenada por la pandemia de COVID-19 tuvo muchos obstáculos. Las dificultades empezaron en la solicitud del beneficio, ya que una parte importante del público-objetivo no tenía acceso a la tecnología, no tenía documentos y, a veces, ni siquiera conocimiento sobre los servicios que podrían ayudarlos en el proceso de solicitud, como la Oficina del Defensor Público o los Centros de Referencia de Asistencia Social. Además, en este contexto, no solo por una pandemia, sino también por una crisis política y ataques ininterrumpidos contra los derechos sociales, ha habido un debilitamiento de los servicios de asistencia social que son cada vez más incapaces de contestar todas las demandas procedentes de la situación histórica actual.

La difusión de noticias falsas (*fake news*) sobre la pandemia, sobre las formas de prevenir la enfermedad, los tratamientos y servicios disponibles en la red de salud pública y la Ayuda de Emergencia en sí misma, han sido una gran desventaja para

la protección de la clase trabajadora, que muchas veces se convierte en la principal víctima de esta estrategia manipuladora. La falta de información confiable en contextos de crisis puede conducir a las familias y grupos no solo enfermedades y muertes por el coronavirus, sino también situaciones de inseguridad alimentaria, desempleo e informalidad, violencia contra niños, adolescentes, ancianos, personas con discapacidad y mujeres, incluso el feminicidio.

Se ha observado desde el comienzo de la pandemia el aumento de la violencia doméstica. Las mujeres y los niños están encerrados en el hogar con sus verdugos, aún más agresivos frente a la cohabitación intensiva, la reducción de los ingresos, la tensión inherente a cualquier aislamiento, el mayor uso de alcohol y otras drogas, ahora ya no en bares o en la calle, pero dentro de los hogares. En Brasil, los informes de parejas peleando por terceros aumentaron un 431% después de la adopción del aislamiento social y, en São Paulo, el estado más poblado del país, los casos de feminicidio aumentaron un 46,2% en comparación con el mismo período en 2019 (Foro Brasileño Seguridad Pública, 2020). Por lo tanto, incluso si se convierte en beneficiario de la Ayuda de Emergencia, la situación precaria de la clase trabajadora se perpetúa por distintas circunstancias, las cuales, en su mayoría, ya eran críticas en el período anterior a la emergencia de salud global.

Volviendo al tema de los alimentos, es importante destacar que la Ayuda de Emergencia no ha podido, a solas, garantizar la seguridad alimentaria de las familias atendidas.

Según la Investigación Nacional de Canastas Básicas de Alimentos (PNCBA), del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE, 2020a)³, el precio de la canasta básica aumentó en 15 de las 17 capitales brasileñas encuestadas. El valor de la canasta básica en la ciudad de Río de Janeiro, la más cara del país, comprendió un total de R\$533,65, seguida de la canasta básica en São Paulo, que vale R\$517,13.

Considerando que el salario mínimo debe cubrir los gastos del trabajador y su familia con alimentos, vivienda, educación, vestimenta, higiene, transporte, recreación y seguridad social, Dieese defendió que, en marzo de 2020, el salario mínimo debería ser de R\$4.483,20, a saber, 4,29 veces más el valor actual (de R\$1.045,00). Para el trabajador remunerado con el salario mínimo, el costo de la canasta compromete el 47,95% de su rentabilidad. Teniendo en cuenta que la Ayuda de Emergencia es de R\$ 600,00 o 1200,00 para la mujer jefa de familia con hijos, el beneficio resulta insuficiente para proporcionar los alimentos y otros gastos de la familia, incluso los relacionados con la higiene (fundamental para la prevención de COVID-19).

Se sabe que cuanto más pobre es una familia, mayor es el peso relativo del gasto en alimentos sobre su ingreso total, lo que compromete seriamente el acceso a otros bienes y servicios necesarios. Por lo tanto, cualquier necesidad de gasto adicional afecta la capacidad de satisfacer las necesidades alimentarias básicas de sus miembros (Silva, 2014).

Considerando que el ingreso determina la elección de alimentos, la seguridad alimentaria y nutricional debe ser asegurada mediante políticas públicas efectivas. Además, acciones de distribución de alimentos y una política de suministro deben asociarse con la Ayuda de Emergencia para minimizar la urgencia alimentaria de la población en este contexto. Mejorar la situación económica de las familias, acortar la cadena de producción, especialmente para las personas en extrema pobreza, el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) son esenciales. Este último programa, por ejemplo, garantiza alimentos para estudiantes de todo el país en días escolares. La suspensión de las clases de educación básica, esencial para el control de la pandemia, afecta, por otro lado, la seguridad alimentaria de los niños y adolescentes que encontraron, en las comidas escolares, su -a veces la única- fuente de alimentos seguros.

3. "El Decreto Ley nº 399, de 30 de abril de 1938, que regulaba el salario mínimo en Brasil y aún está vigente hoy en día, determinó que la canasta de alimentos debería consistir en 13 productos alimenticios en cantidades suficientes para garantizar, durante un mes, el sustento y el bienestar de un trabajador adulto. Los bienes y cantidades estipulados se diferencian por región, de acuerdo con los hábitos alimentarios locales" (DIEESE, 2020).

Otro factor agravante con respecto a la garantía de seguridad alimentaria y nutricional para la clase trabajadora ha sido la sobrecarga de mujeres en la situación actual, generalmente las responsables, también, de la alimentación familiar. Según la investigación “Sin parar: el trabajo y la vida de las mujeres en la pandemia”, por la organización Género y Número, en asociación con la Organización Feminista Sempreviva, la mitad de las mujeres empezaron a cuidar a alguien en la pandemia⁴. El cuidado también se ha intensificado: según el estudio mencionada anteriormente, el 72% de las mujeres declararon que la necesidad de seguimiento o monitoreo aumentó. A pesar del aumento del trabajo doméstico no remunerado, la mayoría de las entrevistadas continuaron trabajando fuera de casa y el 41% de ellas dijeron que estaban trabajando más duro, aunque el salario sigue siendo el mismo. Esta realidad, sumada al desmantelamiento de programas y proyectos comprometidos con la agricultura familiar y el derecho humano a una alimentación adecuada, generó una marcha en los supermercados en busca de productos industrializados ultraprocesados. Es decir, incluso con un poder adquisitivo relativo y un suministro garantizado, el consumo ha sido y debe seguir siendo de productos alimenticios de baja calidad, lo que puede generar enfermedades como diabetes e hipertensión, ambas comorbilidades que aumentan las posibilidades de los pacientes con COVID-19 desarrollaren la forma más severa de la enfermedad.

Sin embargo, el gobierno de Jair Bolsonaro tiene prisa por suprimir la Ayuda de Emergencia, ya insuficiente como visto, para aumentar las medidas económicas, sin tener en cuenta la situación real de miles de brasileños y las garantías fundamentales previstas en la Constitución Federal de 1988, un caso emblemático en que el estado de excepción suspende el Estado de Derecho. No es en vano el término utilizado hoy en Brasil para describir el proyecto político en curso: *necropolítica*, un término acuñado por el camerunés Achille Mbembe

y que describe una situación en la que se ejerce la soberanía política al elegir quién puede vivir y quién puede o debe morir⁵.

En las *favelas* y las periferias nacionales, además del bajo suministro de agua potable, saneamiento básico y alimentos, los residentes han tenido acceso limitado a equipos de protección, como máscaras, alcohol 70% y guantes; mayor exposición al coronavirus en transporte público precario y que no cuentan con protocolos de seguridad contra la enfermedad; la pérdida y/o ausencia de una red de apoyo y apoyo comunitario y políticas públicas (asistencia social, educación, seguridad alimentaria); la ausencia del Estado con relación a las violaciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia; la intensificación de las acciones policiales con violencia. También se puede mencionar, afectando principalmente los niños, adolescentes y mujeres, la suspensión del año académico de la guardería y la escuela, en una situación que compromete los derechos de los bebés y niños y jóvenes que se quedan solos en casa o obligados a acompañar a sus madres en sus lugares de trabajo. Durante la pandemia, hay al menos dos casos trágicos y emblemáticos que ocurrieron en Brasil como resultado de la falta de protección de las familias pobres: la trabajadora doméstica (anciana y con comorbilidades) que murió como resultado de la transmisión de COVID-19 por parte de su empleadora, recién llegada de Italia; y la muerte de Miguel, un niño de 5 años que acompañó a su madre, una empleada doméstica, en el trabajo, y se cayó del noveno piso de un edificio de lujo en la zona privilegiada de la ciudad de Recife debido a la negligencia de la empleadora⁶. Es esencial mencionar, una vez más, que la mayoría de los residentes de las comunidades periféricas del país son negros y el racismo es un factor estructural en la construcción de la desigualdad y la miseria en Brasil.

Con respecto a la seguridad alimentaria, varios determinantes -económicos, políticos, ambienta-

4. Según la encuesta, el 50% de las mujeres indígenas, el 46% de las mujeres blancas y el 52% de las mujeres negras.

5. Sobre esto, ver Mbembe (2016).

6. Se puede encontrar más información sobre los casos en el estudio de DIEESE “¿Quién se encarga de los cuidadores? Servicio doméstico remunerado en tiempos de coronavirus (2020b).

les, educativos- afectan a las personas en situación de pobreza y exigen políticas convergentes que sean capaces de abarcar la compleja totalidad del problema. Por lo tanto, se deben promover varios frentes de acción, tales como: el fortalecimiento del Programa Nacional de Adquisición de Alimentos; la expansión y la operación ininterrumpida de restaurantes populares adaptados al contexto de la pandemia -con la distribución de equipos de higiene y máscaras y la dispensa del pago a las familias de bajos ingresos registradas en el CadÚnico y aquellos que accedieron a Ayuda de Emergencia o a las personas sin hogar, además de la posibilidad de coger comida en forma de *drive-thru*; la distribución de canastas de alimentos básicos en territorios con incidencia de pobreza, incluyendo las poblaciones indígenas, comunidades ribereñas, comunidades de afrodescendientes [quilombolas], gitanos, inmigrantes, entre otros; la distribución continua de alimentos en instituciones de acogida, hostales, viviendas transitorias y clínicas de rehabilitación; la permanencia de la oferta de alimentación escolar a los estudiantes durante el período de suspensión de clases o de la oferta remota de educación; garantizando el apoyo financiero estatal para la agricultura familiar, pequeños extractivistas, pescadores artesanales y productores de alimentos orgánicos; la implementación de medidas proteccionistas que eviten el aumento del precio de los alimentos, entre otras medidas (Bárcena; Berdegué, 2020).

En todas las iniciativas, es esencial considerar el tema de la raza, el género, la diversidad (*quilombolas*, indígenas y otras comunidades tradicionales, inmigrantes, personas sin hogar, personas mayores) y la resolución de la inseguridad alimentaria en contextos institucionales. En un artículo publicado en abril de 2020 por el Gobierno del Distrito Federal, se distribuyeron 4.4 toneladas de alimentos y 250 kilos de pastel en 30 instituciones de asistencia social a través del PAA, de 18 agricultores familiares en el Distrito Federal, una acción que involucró a varias agencias intersectoriales (AGÊNCIA BRASÍLIA, 2020). Sin embargo, esto no puede ser una acción única; debe ser una política estatal en curso.

La situación alimentaria en Brasil es crítica y el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) es una forma fundamental de enfrentar el hambre en

el país, especialmente considerando el escenario epidémico de COVID-19. Es esencial reforzar que el problema no es la falta de alimentos, ya que, a pesar de las adversidades, continúan siendo producidos por medio de la agricultura familiar. El problema es el impacto de la pobreza y la desigualdad social en el flujo, distribución y consumo de estos productos.

En un momento de retracción de las políticas públicas y los derechos sociales, la movilización social debe centrarse en la necesidad de medidas que garanticen la continuidad, incluso después de la pandemia, de medidas que fomenten la seguridad alimentaria y nutricional, incluida la reconstrucción inmediata de leyes, instituciones, consejos y organizaciones que fueron extinguidas por el gobierno federal. El hambre y la inseguridad alimentaria no pueden resolverse con donaciones específicas y solidaridad, sino con políticas públicas que respondan a un derecho social y ciudadano objetivo y universal.

CONCLUSIONES

La austeridad mata, especialmente en un país como Brasil, el séptimo país más desigual del mundo y que ya estaba experimentando un severo proceso de recesión y crisis económica y política, incluso antes de la pandemia. Sin embargo, las altas tasas de desempleo e informalidad; el debilitamiento de los derechos como resultado de las reformas laborales y de seguridad social; las crisis del mercado laboral; el racismo estructural; las relaciones patriarcales de género; la violencia policial; todos los factores que ya habían matado a la población más pobre durante algunos años, fueron acentuados por la emergencia de salud pública causada por el COVID-19. El desmantelamiento progresivo de los derechos fundamentales como el derecho a la alimentación, el trabajo protegido y la seguridad social, el desguace del Sistema Único de Salud, el Sistema Unificado de Asistencia Social (SUAS), la Política Educativa, han afectado aún más a los ciudadanos en el contexto actual.

En este texto, buscamos debatir, con base en investigaciones recientes e informes sobre la situación actual, algunas de las consecuencias de la

pandemia de COVID-19 en Brasil para la seguridad alimentaria de la población nacional, especialmente los pobres y los extremadamente pobres. Se observó, como ya se informó, que los desafíos inherentes a la condición política y económica brasileña fueron reforzados y expuestos por la pandemia. Al mismo tiempo, la forma en que el Gobierno actual ha abordado la crisis estructural en curso ha sido especialmente brutal para la clase trabajadora. La apatía expresada en la no acción, cuando se debe hacer algo con urgencia, junto con una acción irresponsable e irreflexiva, señala la necropolítica brasileña actual que naturaliza el sufrimiento y ha condenado a muerte a miles de personas, tanto por COVID-19 como en consecuencia de la inseguridad alimentaria, del desempleo, de la miseria.

La destrucción de políticas y derechos sociales duramente obtenidos, como una estrategia más del poder del gobierno para decidir quién puede vivir y quién debe morir, se ve facilitada por la dificultad de la movilización social en el contexto del aislamiento y la cuarentena. Todos los días, en Brasil, se aprueban nuevos decretos y enmiendas que arruinan el ya precario sistema de protección social que existía antes de la elección de Jair Bolsonaro para la presidencia.

La defensa intransigente de las políticas sociales y el derecho fundamental a la vida, logrados mediante el acceso a alimentos adecuados, agua potable, buenas condiciones de higiene y saneamiento, viviendas de calidad, salud pública, debe ser la primera y no negociable bandera de la clase trabajadora.

BIBLIOGRAFIA

- Agência Brasília (2020). “Programa de Aquisição de Alimentos ajuda a reduzir impactos da pandemia de Covid -19” (06/04/20). Disponível em internet, em: <https://agenciabrasilia.df.gov.br/2020/04/06/programa-de-aquisicao-de-alimentos-ajuda-a-reduzir-impactos-da-pandemia-de-covid-19/>
- Andrade, J. P. de; Bittencourt, N. A. (2020) “A boiada do veneno na pandemia”. In. *Terra de Direitos*. Disponível em internet, em: <https://terradedireitos.org.br/acervo/artigos/a-boiada-do-veneno-na-pandemia/23433>
- Bárcena, A.; Berdegué, J. Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme em uma crisis alimentaria: acciones urgentes contra el hambre en America Latina e el Caribe. *Informe COVID-19*. Roma: CEPAL/FAO, jul. 2020.
- Castro, J. (1948) *Geografia da fome*. Rio de Janeiro: O Cruzeiro.
- Castro, I.R.R.de. (2019) “A extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a agenda de alimentação e nutrição”. En *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v.35, nº 2, Disponível em internet, em: <https://doi.org/10.1590/0102-311x00009919>
- Conti, L.I y Schoeder, O.E. (2013). “Convivência com o Semiárido Brasileiro: Autonomia e Protagonismo”. Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – FAURGS/ REDEgenteSAN / Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade – IABS / Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento – AECID / Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS. Brasília: Editora IABS.
- Data favela; Locomotiva pesquisa & estratégia (2020). *Coronavírus nas Favelas II*.
- DIEESE. (2020a) Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos. São Paulo. Disponível em internet, em: <https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/analiseCestaBasica202003.html>
- DIEESE. (2020b) “Quem Cuida das Cuidadoras? Trabalho doméstico remunerado em tempos de coronavírus. Disponível em internet, em: <https://www.dieese.org.br/estudose-pesquisas/2020/estPesq96covidTrabalhoDomestico.html>
- FAO; OPAS. (2017) *Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional: sistemas alimentares sustentáveis para acabar com a fome e a má nutrição*. Sumário Executivo. Santiago/Chile.
- Fórum Brasileiro de Segurança Pública. (2020) *Violência Doméstica durante a pandemia de COVID-19*. Disponível em internet, em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/05/violencia-domestica-covid-19-v3.pdf>
- Gênero e Número; Sempre Viva Organização Feminista. (2020) *Sem parar: o trabalho e a vida das mulheres na pandemia*. Disponível em internet, em: <http://mulheresnapanemia.sof.org.br/> Acesso em 30/07/2020.
- Guimarães, C. (2020). “Covid -19: especialistas falam sobre políticas de proteção social”. Matéria de 27/05/2020. Disponível em internet, em: <https://agencia.fiocruz.br/covid-19-especialistas-falam-sobre-politicas-de-protecao-social>
- Imperatori, K. T (2020). “As implicações da COVID-19 para a Proteção Social”. Instituto de Ciências Humanas (ICH), Universidade de Brasília. Brasília. Disponível em internet, em <http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-projetos/as-implicacoes-da-covid-19-para-a-protecao-social/>
- Liveira, T. C y Abranches, M. V. y Lana, R. M. (2020) “(In)Segurança alimentar no contexto da pandemia por SARS-CoV-2.” En *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro , v. 36, n. 4, Disponível em internet em: <https://doi.org/10.1590/0102-311x0005220>.
- Malavê, M (2020) “Alimentação e Covid-19: o que você precisa saber” em IFF, Fiocruz, Rio de Janeiro. Disponível em internet, em: <http://www.iff.fiocruz.br/index.php/8-noticias/674-alimentacao-covid>
- Mbembe, A. (2016) Necropolítica. In: *Arte & Ensaios*, revista do ppgav/eba/ufrrj, n. 32, dezembro 2016. Rio de Janeiro. Disponível em internet, em [file:///C:/Users/camil/Downloads/8993-17970-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/camil/Downloads/8993-17970-1-SM%20(1).pdf) Acesso em 03/03/2020.
- Pinto, A. E. de S. (2020). “Brasil completa 3 meses com transmissão acelerada de coronavírus, mostram cálculos”. In: *Folha de São Paulo*, 29/07/2020. Disponível em internet, em <https://www1.folha.uol.com.br/eqilibrio-e-saude/2020/07/brasil-completa-3-meses-com-transmissao-acelerada-de-coronavirus-mostram-calculos.shtml> Acesso em 29/07/2020
- Silva, P. S. (2014) “A Trajetória Histórica da Segurança Alimentar e Nutricional na Agenda Política Nacional: Projetos, Descontinuidades e Consolidação”. *Texto para Discussão 1953*. Brasília; Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea. Disponível em internet, em http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3019/1/TD_1953.pdf

